

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 18° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-1200-2021
CARATULADO : ANGULO/CONSEJO DE DEFENSAL DEL
ESTADO

Santiago, veintiocho de Noviembre de dos mil veintidós

VISTOS:

Don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, domiciliado en Doctor Sotero del Río N°326, oficina 1104, comuna de Santiago, compareciendo en representación de don Gerardo Enrique Angulo Pizarro, micro empresario, domiciliado calle Rosas n°104, ciudad de Chillan, deduce demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas 1687, comuna de Santiago.

Funda la demanda en que don Gerardo Enrique Angulo Pizarro, se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo n°1040 del año 2003, del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I, con el número 1348.

Luego, sobre lo vivido en tiempo de dictadura militar, procede a efectuar el siguiente relato del actor, el cual pasa a transcribirse a continuación:

“Es difícil volver al pasado después de casi 30 años. Tratar de reconstruir los acontecimientos, el tiempo, el espacio y los personajes, especialmente, porque desde entonces, he tratado de olvidarlos.

En el año 1985, me hice parte de las Juventudes Comunistas, en Chillan, si bien tenía clara conciencia de los tiempos políticos y represivos que vivía el país, hacerme militante me dio la posibilidad de ser parte de un colectivo, que en nuestro caso lo componíamos cinco jóvenes, incluyendo a mi hermano Robert (de 20 años de edad). En ese momento yo tenía 23 años. Ser militante abrió mi mente para entender que mis problemas, mis carencias, mis faltas de oportunidades, no solo eran algo que me afectaba a mí, sino algo muy común en jóvenes de mi edad.



Foja: 1

Recuerdo que nuestras actividades políticas, consistían en reuniones, donde comentábamos la situación política nacional, con información que nos hacían llegar desde el partido. En algunas oportunidades también salimos a rayar los muros, consignas en contra de la dictadura, o a tirar panfletos en la oscuridad de la noche, como una forma de vencer el temor de nuestros vecinos de la población Vicente Pérez Rosales. Actividades que comenzaban con la generación de recursos, para la compra de pintura espray, resma de papel, etc., y beneficios, que se traducían en ventas de sopaipillas, o alguna fiesta que organizábamos en el vecindario. Nunca tuvimos un arma, nunca un explosivo, jamás se habló y nadie nos pidió, o dijo que alguna vez deberíamos evolucionar en la forma de nuestras acciones políticas.

El día 30 de Junio de 1986, a las 23.00 horas, mientras caminábamos por la calle Schleyer, junto a Gilberto Contreras, también miembro de nuestra célula de las JJCC., que se produce nuestra detención. Recuerdo muchos gritos que nos conminaban a levantar las manos, tirarnos al suelo, un gran grupo de personas corriendo hacia nosotros y luego golpes de puño puntapié y culatazos, antes y después de habernos esposado. Fue todo muy rápido, pero pude darme cuenta que todos eran civiles quienes nunca se identificaron.

Posteriormente, me vendaron la vista y me subieron a un vehículo para llevarme hasta el lugar donde vivía (la casa de un familiar). Me pude dar cuenta que estaba ahí porque me preguntaban cosas relacionadas con esa casa. Después de haber estado ahí algún tiempo, me subieron de nuevo a un vehículo y pude percatarme que también llevaban a mi hermano Robert, hasta un lugar en la calle 18 de Septiembre. Escuchamos que abrían un pesado portón metálico.

En el interior y sin mediar pregunta alguna comenzaron a torturarme, me sacaron la camisa y me aplicaron electricidad tendido en un piso mojado, en una especie de baño. No sé cuánto tiempo duró. Recuerdo que sentí que mi cuerpo se despegaba del suelo a veces por la corriente eléctrica, creo que lo más terrible era no saber lo que vendría después. En algún momento deje de sentir los golpes de puño y pies, seguramente por la adrenalina. Más tarde me ingresaron a un tipo de oficina, me preguntaban datos personales, se escuchaba que alguien tomaba nota en una máquina de escribir. En algún momento entro alguien y preguntó, ¿estos son los terroristas? a lo que mi interrogador respondió, ¿estos son unos cabros de pobla no má, medio color que le pusieron!

Nunca me preguntaron algo relacionado con lo político, ni por alguna persona, o por algún hecho. Mas tarde me sacaron la venda y me pidieron que mirara una cámara. La foto salió al otro día en el diario “La Discusión de Chillan”, junto a la fotografía de mi hermano y de otros dos compañeros (Luis Velásquez y Gilberto Contreras) bajo un título que hacía mención a que una célula terrorista había sido desactivada.

La luz de la madrugada se filtraba por la venda, “un trapo blanco con manchas de pintura roja” pensé en ese momento, cuando realmente era mi propia sangre. Me subieron a la parte de atrás de una camioneta y pude



Foja: 1

darme cuenta que también iba mi hermano. En el camino se escuchaban camiones hasta que llegamos a algún control o peaje, y uno de los agentes que nos tenía secuestrados se presentó como CNI, para pasar rápido. El camino tenía muchas curvas, bien pudo ser la vía de Florida a Concepción. En algún momento un agente mencionó como destino, La Base. Siempre pensé que pudieron habernos llevado a Talcahuano, por el aire de mar que se sentía.

Una vez allí, recuerdo haber estado muchas horas de pie, con la frente pegada a un muro, esposado de manos y siempre vendado, mientras constantemente pasaba alguien por atrás y me golpeaba con patadas y puños, profiriendo insultos y amenazas, como por ejemplo, “hasta aquí no más llegaste comunista”. Luego, me ingresaron a un recinto y me permitieron sentarme sobre un somier de huinchas metálicas, donde me dejaron un buen rato. Pude darme cuenta que ahí estaban también mi hermano Robert, y mis amigos Gilberto Contreras y Luis Velásquez, quien dijo que a él lo habían detenido en su casa y que no entendía que estaba haciendo ahí.

En ese lugar pude mirar por debajo de la venda. Ví buzos azules, como de trabajo y zapatillas de “gimnasia” blancas. Alguien dijo estaban listos los ternos para la interrogación. Me ingresaron a un lugar donde alguien comenzó a preguntarme sobre qué acciones habíamos realizado cuando ingresé a las JJCC., me preguntaron también sobre una persona de apellido Manzano, a quien no conocía, sobre mi polola, Mónica Jofre. Acto seguido me amenazaron que si no firmaba una declaración la iban a detener también. Me preguntaron por varias situaciones, sobre la quema de una barraca y otras cosas que no recuerdo. Al final me dijeron que ellos podían tenernos ahí por mucho tiempo, hasta que firmáramos. Finalmente, accedí a firmar para poder salir de esa situación, y mi hermano y mis amigos también lo hicieron.

Nos sacaron de ese lugar y nos llevaron a Chillan. Recuerdo que nos bajaron del vehículo y nos hicieron caminar algunos metros, hasta que alguien llegó corriendo y les dijo a quienes nos tenían detenidos, que nos sacaran las vendas porque había periodistas. Estábamos en la plazoleta de los edificios públicos. Nos llevaban a la fiscalía militar. Nos hicieron pasar a una oficina uno por uno. Cuando llegó mi turno, le dije al fiscal que la declaración habían sido firmada a la fuerza y que me habían torturado, respondiendo: “Todos dicen lo mismo, ahora se van a ir incomunicados”. Fuimos conducidos a la cárcel de Chillan y nos incomunicaron en celdas que estaban continuas, por una semana, sin recibir alimentación.

Después de esa semana nos llevaron nuevamente a la fiscalía militar, ocasión en la que nuevamente reitere lo de la tortura y que la “confesión” no era verdadera, a lo que el fiscal me dijo; “Si no la aceptas, te vas un mes más incomunicado”. Accedí a firmar para poder salir de esa situación, quería saber de mi mamá, de mis otros hermanos, de mi polola, además volver a comer. Llevaba 9 días sin alimentarme.

Sin embargo, me dejaron detenido en la cárcel. Después de un mes aproximadamente, Gendarmería me llevo hacia el sector donde estaban reclusos los menores de edad, para que agentes de la CNI, me interrogaran



Foja: 1

nuevamente, situación a la que me opuse. Inmediatamente un agente del Estado me dijo “nosotros dejamos tranquila a tu polola, pero ahora que no vas a cooperar, la vamos a detener”. Situación que posteriormente sucedió.

En el año 1987 fui condenado a 5 años y un día, por Ley antiterrorista, acusado de haber quemado unas maderas de una barraca. En algún momento este proceso salió de la Corte de Apelaciones de Chillan, y se nos acusó por el delito de incendio ante el 4° juzgado del Crimen de Chillan, cuestión que se revirtió, para volver a la Corte de Apelaciones, con la condena ya descrita.

En 1988 fuimos trasladados a la cárcel Chacabuco de Concepción, por instrucción del fiscal ad-hoc, Sr. Torres, mientras nos mantenían un proceso por infracción al artículo octavo, formación de grupos paramilitares y asociación ilícita.

Siempre en esa misma situación jurídica de condenado y procesado, nos trasladaron a todo el grupo desde el penal de Chacabuco, hasta la cárcel nueva de El Manzano, ubicada también en Concepción. Ahí estuve hasta el año 1991, momento, en que salí con el beneficio carcelario de salida diaria, con reclusión nocturna en el mismo penal, por haber sido condenado finalmente después de 5 años, por el artículo octavo a la pena de 18 meses. En ese momento esperábamos el indulto presidencial, del recién asumido presidente Aylwin, después de haber estado un año presos en “democracia”, condenados por ley antiterrorista del dictador.

Llevaba un poco más de una semana con beneficio carcelario cuando solicite en gendarmería un permiso para no llegar una noche, por motivo de la realización de mi matrimonio, permiso que fue conferido pero desconocido por la dirección de gendarmería del penal, lo que me llevo a decidir no presentarme por haber perdido el beneficio y tener que reingresar al penal, con un proceso de quebrantamiento de condena. Situación que me llevo posteriormente y con apoyo de abogados del FASIC, a entregarme en la Cárcel Publica de Santiago, permaneciendo detenido por tres meses, mientras salía el indulto presidencial, a fines del año 1991.

La reinserción social fue casi imposible. Conocí a mi compañera Ana Henríquez, en la cárcel de Concepción, mientras ella visitaba a otro preso político, y fruto de “venusterios” clandestinos, nació una hija, la que tenía un año de edad, cuando salí definitivamente de prisión. Sin posibilidades de estudiar, ni trabajar, por mis antecedentes, que solo pude borrar recién en el año 2014, lo que ayudó a prolongar la precariedad de nuestra situación económica familiar (5 integrantes).

El CINTRAS fue la organización donde solicité ayuda psicológica a mi salida. Asistí a algunas terapias y tuve que interrumpirlas por mi afán de encontrar algún trabajo. Ahora tengo certeza que nunca me mejoré del todo, mis miedos a volver a estar detenido, hace que siempre experimente temor cuando veo a un policía, o cuando escucho una sirena de una patrulla. Y mis constantes cambios de estados de ánimos me han acompañado en estos casi treinta años, y han sido parte de mis conductas frecuentes y “normales”.



Foja: 1

Relatar hoy mis vivencias, ha sido volver a sentir todos esos terroríficos momentos que no quería volver a recordar. Aunque estos hechos no me han abandonado nunca y permanecen siempre tal como mi memoria episódica más reciente”.

Sostiene que sobre las secuelas emocionales y psicológicas, el informe elaborado por la Psicóloga Clínica, Sra. Fresia Vargas Neira y por el Director Ejecutivo, Sr. José Miguel Guzmán Rojas, del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), de fecha 2 de diciembre de 2020, proporciona un diagnóstico de estrés postraumático con secuelas que perduran hasta el día de hoy.

Afirma que entre los fundamentos de hecho que sustentan la demanda, se encuentran los daños físicos y materiales que sufrió, y por sobre todo, el daño moral directo derivado de a lo menos, las siguientes circunstancias que rodearon la detención y el sometimiento a tratos crueles e inhumanos en su contra, y que en mayor o menor medida se dieron en este caso particular: a) Daño Mental; b) Amenazas; c) Incomunicación; d) Persecuciones; e) Negativa de acceso a la información; f) Inseguridad; g) Presiones y daños psicológicos; h) Alteraciones del sueño; i) Neurosis de angustia, con secuelas de enfermedades psicosomáticas; j) Aislamiento Social; k) Otras secuelas en el seno de la familia, como separaciones forzosas de largo tiempo; l) Derechos Humanos conculcados en toda su amplitud.

En cuanto al derecho, afirma que los antecedentes previamente consignados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como de lesa humanidad según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Núremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998.

Dice que desde la Constitución Política de la República, cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia, tal como lo dispone el artículo 38 inciso segundo del referido cuerpo político legal.

Refiere que desde la perspectiva del Derecho Internacional, este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del *corpus iuris* internacional conformado por el derecho internacional humanitario así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos del cual el Estado de Chile –por cierto– forma parte.

Arguye la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, en efecto como ha quedado de manifiesto, la correcta resolución del caso *sub lite* requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases de



Foja: 1

la Administración del Estado. A *contrario sensu*, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto –como es fácil comprender– se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses. (Al respecto, pueden revisarse además los Arts. 27 y 28 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados).

Indica que por lo anterior implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Luego cita abundante jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema Justicia pertinente al caso.

Sobre el daño provocado y el monto de la indemnización, en el caso de autos existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima que vivió el actor, por parte de agentes del Estado de Chile. La dolorosa situación a la que se ha visto enfrentado configura un claro daño moral que –según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional– amerita ser reparado a través de una indemnización, por ello solicita se condene al Fisco de Chile a pagarle al demandante la suma de \$200.000.000 a título de indemnización por daño moral.

Concluye en mérito de lo expuesto y normas jurídicas citadas, tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al demandado a pagarle al demandante Gerardo Enrique Angulo Pizarro la suma total de \$200.000.000, por concepto de aquellos daños morales que ha padecido con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado ya relatados en este libelo pretensor, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que el tribunal en justicia considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

Con fecha 14 de mayo de 2021, mediante presentación de folio 11, doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contesta la demanda solicitando desde ya su total rechazo conforme a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Opone excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante. Expresa que el Estado de Chile, en un esfuerzo por reparar el



Foja: 1

daño sufrido por víctimas de violaciones a los derechos humanos, ha efectuado una serie de esfuerzos tendientes a conceder la reparación del daño. Así la ley 19.123 y las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

En cuanto a las reparaciones mediante transferencias directas de dinero, menciona que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de: a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737. En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Afirma que desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Respecto de las reparaciones específicas indica que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° s 19.234 y 19.992 y sus modificaciones. La ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, cabe consignar que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

En lo concerniente a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo



Foja: 1

nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Finalmente, respecto de las reparaciones simbólicas, invoca una compensación satisfactiva mediante la construcción de memoriales, establecimiento de museos y obras afines.

Indica que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo *Domic Bezic, Maja y otros con Fisco* ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *“aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”*.

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que:

“DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares



Foja: 1

directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiese gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien –como se dijo- percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos”.

Posteriormente, en subsidio de la excepción de reparación integral alegada, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva, esgrimiendo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes. Conforme al relato efectuado por el actor la privación de libertad y torturas se inició el 13 de septiembre de 1973 y se mantuvo hasta el 30 de octubre del mismo año, según registra la copia de su ficha de ingreso como “preso político y/o torturado” emitida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 27 de abril de 2021, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opongo la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen



Foja: 1

íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opongo la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de las acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil. Asimismo, indica que no existe normativa alguna que establezca que en materia de Derechos Humanos, la acción derivada de un ilícito civil sea de carácter imprescriptible, citando al efecto jurisprudencia afín.

En subsidio de las defensas y excepciones precedente, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, toda vez que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”*.

En subsidio de lo anterior, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Finalmente alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, los que sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Concluye, solicitando tener por contestada la demanda civil, y en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar la demanda en todas sus partes con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 31 de mayo de 2021, mediante presentación de folio 16, obra réplica del actor, sin incorporar hechos sustantivos nuevos a la causa.

Con fecha 09 de junio de 2021, a través de presentación de folio 22, consta dúplica del demandado, donde procede a reiterar las alegaciones, defensas y excepciones expuestas en la contestación del libelo.

Por tratarse de un Juicio Especial de Hacienda, se omitió el llamado a conciliación.



Foja: 1

Con fecha 11 de junio de 2021, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la instrumental y testimonial que obra en autos.

El 22 de agosto de 2022 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1º) Que, don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, domiciliado en Doctor Sotero del Río N°326, oficina 1104, comuna de Santiago, compareciendo en representación de don Gerardo Enrique Angulo Pizarro, micro empresario, domiciliado calle Rosas n°104, ciudad de Chillan, deduce demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas 1687, comuna de Santiago, conforme fundamentos de hechos y de derecho reseñados en la expositiva de esta sentencia, solicitando en definitiva condenar al demandado a pagarle al demandante Gerardo Enrique Angulo Pizarro la suma total de \$200.000.000, por concepto de aquellos daños morales que ha padecido con ocasión de los hechos cometidos por agentes del Estado ya relatados en este libelo pretensor, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que el tribunal en justicia considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, todo ello con costas.

2º) Que, doña Ruth Israel López, abogado procurado fiscal del Consejo de Defensa del Estado, contesta la demanda solicitando su total rechazo conforme excepciones y alegaciones ya expuestas.

3º) Que, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o esta, ello al tenor de lo preceptuado en el artículo 1698 del Código Civil.

4º) Que, a fin de acreditar sus dichos la parte demandante rindió prueba instrumental que se singulariza a continuación: copia de certificado de fecha 19 de noviembre, emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos; copia de certificado de Nacimiento del demandante emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; copia de Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol de ingreso N° 8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018, en que resuelve rechazar el recurso de casación en el fondo, intentado por el Consejo de Defensa del Estado; copia de Certificado Psicológico y Social de fecha 02 de diciembre de 2020 emitido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); copia de Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol N° de ingreso N° 1092-15, de fecha 14 de septiembre del año 2015 copia de Sentencia Rol CDH-2-2017 caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile” dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; copia de Informe Psicológico emitido y suscrito por don Rolando Sigoña Igor, Psicólogo PRAIS del Servicio de Salud Ñuble



Foja: 1

5°) Que, además rindió prueba testimonial consistente en la declaración de don Ramón Belarmino Valencia Sanzana, Emiliano Segundo Santander Llanos y don Álvaro Fabián Valencia Sanzana.

6°) Que, la parte demandada no rindió probanza alguna que ponderar. Sin embargo obra a folio 19 copia de respuesta oficio que ésta solicitara, esto es, ORD DSGT N°4792-1814 del 04 de junio de 2021 emitido por el Instituto de Previsión Social que da cuenta de los montos por reparación de la leyes N° 19.992 y 20.874 recibidos por el demandante.

7°) Que, el actor ha comparecido a estrados invocando su calidad de víctima de violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, motivo por el cual reclama por esta vía el resarcimiento del daño que dicho episodio le ocasionó.

8°) Que, del mérito de lo expuesto en la fase de discusión de estos antecedentes y la copia del Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos aparejada por el actor, no objetada, se tiene por acreditado que don Gerardo Enrique Angulo Pizarro, se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I figurando bajo el n°1348.

9°) Que, el Fisco de Chile opone excepción de prescripción extintiva de la acción civil indemnizatoria, fundado en que a pesar de encontrarse suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 26 de abril de 2021, ha transcurrido con creces el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil, o en subsidio aquel contemplado en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal.

10°) Que, a fin de resolver la excepción de prescripción, cabe tener en consideración que la detención ilegal de demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos. En efecto el hecho en cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a una índole humanitaria proveniente de los derechos de todo ser humano reconocidos éstos en el Tratado Internacional indicado, que prima sobre las normas de derecho interno, en especial del artículo 2497 del Código Civil.

11°) Que, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para resolver la contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución Política de la República



Foja: 1

que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

12°) Que, dado que los derechos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

13°) Que, sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

14°) Que por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

15°) Que a la luz de lo que se ha venido diciendo no cabe sino el rechazo la excepción de prescripción

16°) Que, finalmente el demandado deduce excepción reparación integral fundado en que el demandante ya ha sido indemnizado, ello en virtud de la dictación de la Ley N°19.123 que dispuso la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la que se ha realizado a través de transferencias directas de dinero, asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y reparaciones simbólicas.

17°) Que con dicha alegación el Fisco reconoce, en el caso concreto, una necesidad de reparación y como consecuencia de ello un daño, el que esta sentenciadora entiende que corresponde al daño moral, esto es, toda afección que acarrea un agravio en las afecciones legítimas o de un derecho subjetivo inherente e inmaterial de una persona e imputable a la otra.

En el caso de autos, el perjuicio antes señalado se entiende corresponder al daño moral del actor el que hizo consistir en sufrimiento y angustia irrogada por las diversas vejaciones, torturas físicas y psicológicas cometidas en su persona por agentes del Estado a contar del 30 de junio de 1986.

18°) Que efectivamente, tal y como lo señala el demandado al contestar la demanda, se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentran en una situación como la de los demandantes, las que han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de los familiares cuyo dolor fue causado por agentes del Estado en dicho período, ello no configura lo dispuesto en el



Foja: 1

artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico, esta sentenciadora no considera acorde a la norma internacional mencionada que obliga al Estado chileno en virtud del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, por lo que se desestimaré la alegación de suficiencia de pago.

19°) Que, siendo un hecho indubitado la calidad de víctima invocada por el actor, forzoso resulta concluir que en virtud de principios internacionales en materia de marras los derechos que le fueran conculcados en el contexto de autos constituyen por sí solos un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile.

20°) Que, a fin de acreditar el daño moral invocado, obra prueba testimonial consistente en la declaración de Ramón Belarmino Valencia Sanzana, Emiliano Segundo Santander Llanos y don Álvaro Fabián Valencia Sanzana, quienes legalmente examinados, exentos de tacha y dando razón de sus dichos, ilustran al Tribunal sobre las torturas a que fue sujeto el actor, como así también las consecuencias ulteriores que dicho episodio le causó tanto física como psicológicamente. En efecto, el testigo Ramón Belarmino Valencia Sanzana, conociendo la detención sufrida por el actor, expresa que vio en éste conductas que no son normales, como lo es la desconexión de conversaciones con una evidente actitud retraída. Por su parte el deponente Emiliano Segundo Santander Llanos refiere que ha sabido por dichos del demandante que éste tenía insomnio por el solo hecho de pensar en lo vivido en ese entonces. Finalmente, el testigo Álvaro Fabián Valencia Sanzana comenta observar conductas de persecución por parte del demandante, observando en éste dolor, tristeza, rabia e impotencia derivado del hecho ilícito de autos.

21°) Que, además, y en estricta concordancia a la testimonial antes analizada, rola en autos copias no objetadas de Certificado Psicológico y Social de fecha 02 de diciembre de 2020 emitido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos e Informe Psicológico emanado y suscrito por don Rolando Sigoña Igor, psicólogo clínico del PRAIS del Servicio de Salud de Ñuble, instrumentos que no vienen sino a dar cuenta a esta Juez que el actor Angulo Pizarro es una persona “Traumatizada Extrema” como consecuencia directa de la detención ilegal y posteriores torturas sufridas las cuales terminaron induciéndole un Trauma Crónico y Depresión.

22°) Que, en virtud de las probanzas antes ponderadas, el relato del actor, y teniendo especial consideración la circunstancia fáctica y jurídica de figurar como víctima de violación a los derechos humanos por la entidad legal respectiva, es posible entender que naturalmente ha sufrido una aflicción producto de los tratos inhumanos a que fuera expuesto por parte de agentes del Estado, el cual conforme a criterios de justicia y equidad debe ser indemnizado, estimándose prudencialmente en una indemnización por daño moral de \$80.000.000.- en favor del demandante.



Foja: 1

23°) Que, en cuanto a la solicitud de reajustes e intereses, atendida la naturaleza declarativa de la presente sentencia, las sumas ordenadas deberán enterarse debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, más intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, contabilizados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta que se efectúe el pago efectivo.

24°) Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de prescripción y reparación integral;

II.- Que se acoge la demanda de autos respecto del daño moral sufrido, daño que esta sentenciadora estima prudencialmente en la suma de \$80.000.000.- a favor de Gerardo Enrique Angulo Pizarro, más los intereses y reajustes consignados en el considerando vigésimo tercero de este fallo;

III. Que se condena en costas a la parte demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Dictada por doña Claudia Donoso Niemeyer, Juez Titular; autoriza don Erwin Emir Cárdenas Jofré, Secretario Subrogante.



Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de Noviembre de dos mil veintidós**

